

79ª REUNION — 16ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 22 DE 1958

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Jorge Raúl Decavi,
Oscar López Serrot y Olegario Antonio Becerra

Secretario: doctor Eduardo T. Oliver. — Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ARAMBURÚ, Julio P.
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BAUDUCCO, Enrique
BECERRA, Carlos Alberto
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRÓ, Ángel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BENEVENTANO, Domingo
BERNASCONI, Mario
BLANCO, Rubén Víctor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALÍA, Salvador
BONIFACIO, Juan José
BREYTER, Isaac
BRUZZO IRAOLA, Juan P.
BULIT GONI, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
BUSTOS, Jerónimo L.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAMET, Carlos Ernesto
CANEPA, Sebastián Oreste
CARDENAS, Juan Carlos
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CARRETONI, Jorge C.
CASÁS, José B.
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTÍN, Carlos R.
CORREA, Carlos María
CORTÉS, Ezequiel
CUARETTA, César Ramón
CUEVAZ, Agustín
CHAVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECAVI, Jorge Raúl
DE LA VEGA, Juan Carlos
DESPOUY, Pablo Pedro
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ERREA, Daniel
ESCALADA, Alfredo H.
FASCE, Antonio
FAYA, Luis

FERNÁNDEZ, José Manuel
FERRARIS, Jorge Domingo
FERREIRA, Jorge W.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Ernesto
GARCÍA FLORES, José I.
GARCÍA VEIGA, Ignacio
GARONA, Alberto Agustín
GOLDSTRAJ, Zenón
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ, Ricardo A.
GOROSPE, Valentín
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.
GYSELS, Néstor Juan
HEREDIA, Bernardo M.
HEREDIA, Gilberto L.
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGREANI, Ubaldo H.
JUÁREZ PEÑALVA, Miguel Angel
JUNIN, Simón
JURI, Jorge
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LEÓN, Luis Agustín
LICEAGA, José V.
LICEAGA, María Teresa M. de
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSÓN, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LLUGDAR, Elías N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MERCADO, Valentín A.
MIGLIARO, Victorio M.
MONJARDÍN, Federico F.
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PANELO, Ricardo E.

PARENTE, Miguel A.
PARODI GRIMAU, Misael J.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PITTALUGA, José Saturnino
PITTO, Luis María
POITEVIN, R. Emilio
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Angel Oscar
RAVETTI, Francisco Antonio
RECIO, José A.
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SALOMONE, Humberto
SANTAGADA, Nírido E.
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SCHWEIZER, Bernardo
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SIRENA, Antonio C. P.
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
SUJEROS, Pedro Ignacio P.
TABULLI, Pascual
TECCO, Luis Alberto
TELLO ROSAS, Cándido
TONELLI, Haroldo Juan
TORTONESE, Dante Oscar
TÓRTORA, Antonio
URCELAY, Rafael Cándido
UZAL, Francisco Hipólito
VALLE, Salvador
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VERDAGUER, Armando Miguel
VILLAR, Alfredo
VINCIGUERRA, Rómulo
ZARRIELLO, Raúl Jorge
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALDERETE, Elio
ALZABÉ, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio

ARITO, Juan
 BARRIO, Luis
 CASELLA PINERO, Juan M.
 CONTE (h.), Adolfo
 FEIGUÍN de FERRARI, Berta
 GIANSEIRA, Marino Alejandro
 GIORANO ECHEGOYEN, Mario
 LAFUENTE, Ambrosio César
 LISCHETTI, Carlos A. M.
 LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
 LUELMO, Horacio Flavio
 MANTECÓN, Esteban
 MONTE, Ricardo Álvaro

PENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.
 RIVERO, Jorge I.
 SANTONI, Nabucodonosor
 ZANNI, Enrique Mario

AUSENTES, SIN AVISO:

ABAROA, Rufina Vicente
 BERTONE, Marcos R.
 FUERTES, A. Ricardo
 GILI, Miguel
 GUTIÉRREZ, José María
 KRONHAUS, Arnoldo

MÁS, Juan Antonio
 MORENO, Eufemio Teclo
 MOSCA, Gabriel Carlos J.
 PERALTA, Domingo Orlando A.
 POLOGNA, Aurelio José
 PURICELLI, Valdemar
 RUIZ, Lucio Carlos
 SEGOVIA, Carlos A.
 SOLANAS, Juan Carlos
 STORANI, Conrado Hugo
 SUAREZ, Faundo Roberto
 TESSIO, Aldo E.
 TROILO, Eleogardo B.

SUMARIO

- 1.—**Manifestaciones en minoría.** (Página 6841.)
- 2.—**Trámite de asuntos entrados.** (Página 6841.)
- 3.—**Licencias para faltar a sesiones.** (Página 6842.)
- 4.—**Fijación del orden de la labor** de la Honorable Cámara. (Página 6842.)
- 5.—**Integración de la comisión** especial encargada de informar sobre la cuestión planteada a raíz de las palabras del señor diputado Rodríguez Araya en debates de la Honorable Cámara. (Página 6848.)
- 6.—**Continúa la consideración** del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de reformas al régimen impositivo. Se sanciona. (Página 6848.)
- 7.—**Consideración** del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre régimen de distribución de impuestos. Se sanciona. (Página 6856.)
- 8.—**Consideración** del despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre aplicación del escalafón para el personal civil de la administración pública. (Página 6866.)
- 9.—**Apéndice:**
 - I.—**Sanciones de la Honorable Cámara.** (Página 6897.)
 - II.—**Asuntos entrados:**
 - I.—**Mensaje del Poder Ejecutivo** por el que remite informes sobre sumas ingresadas al fondo instituido por ley 13.478. (Página 6907.)
 - II.—**Mensaje y proyecto de ley** del Poder Ejecutivo, por el que se deja sin efecto la obligación de pedir certificados de inhibiciones, embargos e hipotecas para la transferencia de bienes de dominio privado del Estado nacional. (Página 6907.)
 - III.—**Mensaje del Poder Ejecutivo** sobre inclusión en las sesiones extraordinarias de la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. (Página 6908.)
 - IV.—**Mensaje del Poder Ejecutivo:** inclusión en las sesiones extraordinarias de la aprobación de los convenios comerciales con las repúblicas de Venezuela y de Perú, y con la Unión Soviética. (Página 6908.)

- V.—**Mensaje del Poder Ejecutivo:** inclusión en las sesiones extraordinarias de la aprobación del contrato a que se refiere el decreto 10.633/58. (Página 6908.)
- VI.—**Mensaje del Poder Ejecutivo:** inclusión en las sesiones extraordinarias de los proyectos de ley sobre denominación de la diócesis de La Pampa, y jurisdicción y límites de la arquidiócesis de La Plata y de las diócesis de Azul, Mercedes y San Nicolás. (Página 6909.)
- VII.—**Comunicaciones del Honorable Senado.** (Página 6909.)
- VIII.—**Comunicaciones oficiales.** (Página 6909.)
- IX.—**Despachos de comisión.** (Página 6909.)
- X.—**Peticiones particulares.** (Página 6909.)
- XI.—**Proyecto de ley** del señor diputado Tarulli: escuelas de readaptación y educación de niños deficitarios o débiles mentales. (Página 6910.)
- XII.—**Proyecto de ley** del señor diputado Cortés: transferencia de inmuebles adquiridos en propiedad horizontal. (Página 6911.)
- XIII.—**Proyecto de ley** del señor diputado Marconato: cuerpo de policía preventiva para vigilancia de menores en la Capital Federal. (Página 6912.)
- XIV.—**Proyecto de ley** del señor diputado Cárdenas: subsidio al Club Sportivo Alfredo Guzmán, de San Miguel de Tucumán. (Página 6913.)
- XV.—**Proyecto de ley** del señor diputado Tarulli: edificio para la Escuela de Artes y Oficios en San Miguel de Tucumán. (Página 6914.)
- XVI.—**Proyecto de ley** de los señores diputados Suárez y otros: subsidio a la Comisión pro Mausoleo para guardar los restos del ex presidente de la República doctor Roque Sáenz Peña. (Página 6914.)
- XVII.—**Proyecto de ley** del señor diputado Rodríguez Araya: requisitos para el ingreso de los aspirantes a cursos del magisterio. (Página 6914.)
- XVIII.—**Proyecto de ley** del señor diputado Tarulli: creación de una escuela mixta en Los Sarmientos, Tucumán. (Página 6915.)

cionalidad y se va a la delegación de facultades, que no puede hacer este Congreso. El artículo 44 de la Constitución Nacional da a esta Cámara de Diputados la potestad exclusiva de ser el órgano iniciador de todas las iniciativas sobre contribuciones, por lo que en modo alguno puede facultar al Poder Ejecutivo —delegándoles sus atribuciones— para que él establezca por su propia voluntad impuestos o contribuciones, cualquiera sea el tipo.

Esto último es a lo que tiende esta cláusula, y aquélla es la prohibición de tipo constitucional. Dice la última parte del artículo que el Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer, con carácter transitorio —y la transitoriedad no le quita el carácter a la delegación— impuestos sobre determinadas importaciones y/o exportaciones. No dice, pues, lo que el señor miembro informante de la mayoría pretende hacerle decir al aclarar esta disposición. La redacción es terminante: se autoriza al Poder Ejecutivo a crear impuestos. Este Congreso no puede hacer semejante delegación, porque incurre, evidentemente, en un vicio de inconstitucionalidad.

Estas son las razones que mueven a este sector para votar en contra del artículo que se considera.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Quiero dejar aclarado un concepto vinculado con el artículo 14 del despacho de la comisión, que fue votado ayer, por el cual se incrementa la contribución inmobiliaria en el 100 por ciento cuando la última valuación fiscal fuere anterior a 1949, y en el 50 por ciento cuando la última valuación fiscal fuere posterior a esa fecha y anterior al 26 de junio de 1956.

De conformidad con el artículo 8º del decreto 2.186 del 28 de febrero de 1957, prorrogado por la ley 14.775, el incremento a que me refiero es trasladable, toda vez que los aumentos de tasas e impuestos que gravan a los inmuebles locados serán abonados por los inquilinos, pudiendo los locadores o sublocadores elevar los alquileres en la exacta medida de dichas imposiciones.

Sr. Armendáriz. — Deseo preguntar al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dónde está esa disposición.

Sr. Prece. — Acabo de informar que está en el artículo 8º del decreto ley 2.186 del 28 de febrero de 1957, prorrogado por la ley 14.775.

Sr. Armendáriz. — ¿Y adónde se va a incorporar?

Sr. Prece. — Es una disposición de la ley 14.775, que está en vigencia.

Sr. Armendáriz. — ¿De modo que no es necesaria ninguna aclaración en esta ley?

Sr. Prece. — Así es.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Silveira Márquez. — El decreto que menciona el señor diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda es de un gobierno defacto en el que se hallaban reunidas las facultades ejecutivas y legislativas.

La norma a que se refiere el señor diputado Pozzio con todo fundamento, es la que establece nuestra Constitución por una limitación que surge a su vez de la Constitución americana, inspirada en expresión de lord Chathan según el cual un impuesto, antes de ser pagado debe ser consentido por los representantes del pueblo, y que diera motivo a la secesión de la colonia inglesa, es decir, Estados Unidos.

Esa norma fue volcada a nuestro instituto constitucional como una previsión para evitar confusión de los poderes dentro del régimen republicano.

Entiendo que el Poder Ejecutivo necesita cierta escala para poder moverse, pero el Parlamento en ningún caso debe delegar funciones específicamente establecidas como suyas en la Carta Fundamental.

Ese es mi punto de vista, sin ser un especialista en la materia.

Sr. Presidente (Decavi). — Corresponde votar el artículo 27 con el texto despachado por la comisión.

Sr. Marini. — Que quede constancia de que nuestro sector votará en contra.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 28.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — El artículo 29 es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

7

REGIMEN DE DISTRIBUCION DE IMPUESTOS

Despacho de la comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley sobre «modificación del régimen de distribución del producido de los impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales establecidos por la ley 12.956»; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

(1) Véase el texto de la sanción en la página 6897.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Artículo 1º — A partir del 1º de enero de 1959 y hasta el 31 de diciembre de 1963, la recaudación de los impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales, se distribuirá entre la Nación y las provincias en la forma indicada en los siguientes artículos.

Art. 2º — El producido de los impuestos a que se refiere el artículo 1º se repartirá entre la Nación, por un lado, y el conjunto de las provincias, por el otro, en la forma que se indica a continuación:

Año 1959: 72 % para la Nación y 28 % para el conjunto de las provincias.

Año 1960: 70 % para la Nación y 30 % para el conjunto de las provincias.

Año 1961: 68 % para la Nación y 32 % para el conjunto de las provincias.

Año 1962: 66 % para la Nación y 34 % para el conjunto de las provincias.

Año 1963: 64 % para la Nación y 36 % para el conjunto de las provincias.

Art. 3º — La parte correspondiente a las provincias se distribuirá entre ellas conforme al sistema que se indica a continuación:

1. El setenta y cinco por ciento en la siguiente forma:

a) Una tercera parte de acuerdo con la población que a cada provincia asigne la Dirección Nacional de Estadística y Censos al 31 de diciembre del año base de conformidad con lo establecido por el artículo 4º;

b) Una tercera parte de acuerdo con los recursos percibidos por cada provincia, excluyendo los provenientes del crédito, los correspondientes a la coparticipación en los impuestos de esta ley y los aportes federales;

c) Una tercera parte de acuerdo con el monto de los gastos realizados por cada provincia.

La Comisión de Contralor e Índices establecerá los recursos y gastos computables a los efectos de este inciso.

2. El veinticinco por ciento por partes iguales entre todas las provincias.

Art. 4º — Los índices de distribución necesarios para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 3º tendrán una validez bienal y serán

determinados sobre la base de la información correspondiente al último año calendario completo inmediato anterior a la fecha de iniciación de su vigencia, salvo los índices correspondientes al bienio 1959/60, que se determinará con arreglo a las cifras del ejercicio de 1959.

Art. 5º — En tanto no sean aprobados los índices definitivos de participación a que se refieren los artículos 3º y 4º del presente, la Secretaría de Hacienda de la Nación confeccionará índices provisionales, con arreglo a las normas que anteceden, a los efectos de que el Banco de la Nación Argentina transfiera diariamente a las provincias la parte de los ingresos que les corresponda.

Las entregas tendrán el carácter de anticipo sujeto a reajuste definitivo en función de los índices que aprobará la Comisión de Contralor e Índices a que se refiere el capítulo III.

El Banco de la Nación Argentina no percibirá remuneración de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta ley.

Art. 6º — El derecho de participar en el producido de los impuestos de que trata esta ley queda sujeto a la decisión expresa de cada una de las provincias, la que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

La Nación retendrá los fondos que correspondan a cada provincia hasta tanto se le comunique la adhesión, en cuya oportunidad girará los importes acumulados desde el 1º de enero de 1959. Si luego de transcurrido un año a partir de esta última fecha, alguna provincia no hubiere comunicado aún su adhesión, se considerará que la misma no ha adherido al régimen de esta ley, y los fondos acumulados tendrán el destino que una ley del Congreso Nacional les fije.

CAPÍTULO II

Obligaciones emergentes del régimen de esta ley

Art. 7º — Durante la vigencia de esta ley, la Nación mantendrá el régimen de distribución aquí previsto para todos los impuestos de que trata y que rigen en la actualidad, así como para los análogos que en lo futuro se establezcan.

La Nación, de la parte que le corresponda conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una participación del 5 % del producido total de los gravámenes comprendidos en su régimen, disponiendo su entrega en la forma igual a la prevista por el artículo 5º. Además, la Nación asume las obligaciones previstas en los incisos b), c) y d) del artículo siguiente, por sí y con respecto a los organismos administrativos municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos.

Art. 8º — La adhesión de cada provincia se hará por ley que disponga:

- a) Que acepta el régimen de la presente ley sin limitaciones ni reservas;
- b) Que se obliga a no aplicar gravámenes locales análogos a los establecidos por las leyes de los impuestos a que se refiere la presente;
- c) Que se obliga durante el término de vigencia de la presente ley a derogar los gravámenes provinciales y a promover la derogación de los tributos municipales que resulten en pugna con el régimen de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo local y, en su caso, la autoridad ejecutiva comunal, suspender su aplicación dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de notificación de la decisión que así lo declare;
- d) Que se obliga a adoptar las providencias del caso a fin de que los organismos locales pertinentes presten la colaboración que se les requiera con arreglo a lo previsto por el artículo 14, penúltimo párrafo de esta ley.

CAPÍTULO III

De la Comisión de Contralor e Indices

Art. 9º — Créase una Comisión de Contralor e Indices, cuyas funciones serán las siguientes:

- 1º Aprobar los índices definitivos de distribución a que se refiere el artículo 4º.
- 2º Controlar la liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos corresponda en virtud de la presente ley, para lo cual sus integrantes tendrán libre acceso a toda la documentación.
- 3º Controlar el estricto cumplimiento por parte de los respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al aceptar este régimen de coparticipación y distribución.
- 4º Decidir de oficio o a pedido de la Secretaría de Hacienda de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no, y en su caso en qué medida, a las disposiciones de la presente ley. En igual sentido intervendrá a petición de los contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin perjuicio de la obligación de aquéllos de cumplir las disposiciones fiscales pertinentes.
- 5º Adoptar las disposiciones necesarias en orden a lo dispuesto en el artículo 12, para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
- 6º Dictar normas generales interpretativas de la presente ley.

7º Asesorar a la Nación y a los entes públicos locales, ya sea de oficio o a pedido de partes, en las materias de su especialidad y, en general, en los problemas que crea la aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido reservado expresamente a otra autoridad.

8º Preparar los estudios y proyectos vinculados con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes.

9º Recabar de las reparticiones técnicas respectivas la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 14, u otros que interesen a su cometido.

10 Dictar normas de carácter general y por vía de interpretación de los aspectos no previstos en la distribución del impuesto substitutivo, a cuyo fin la Secretaría de Hacienda deberá dirigirse a la comisión.

Art. 10. — La Comisión de Contralor e Indices estará constituida por un representante de la Nación y por un representante de cada provincia. Funcionará integrada por el representante de la Nación y seis de las provincias. Tendrá su asiento en la Secretaría de Hacienda de la Nación y dictará su reglamento, oportunidad ésta en que deberá hacerlo en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los fiscos representados.

El reglamento fijará la forma de elección y duración de los seis miembros a que se refiere el párrafo 1º, determinará los asuntos que deberán ser sometidos a sesión plenaria y establecerá la normas procesales pertinentes para la actuación ante el organismo.

La comisión formulará su presupuesto, y sus gastos serán sufragados por los fiscos adheridos en proporción a la participación que les corresponda en virtud de la presente ley.

Art. 11. — Las decisiones de la Comisión de Contralor e Indices serán obligatorias para la Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a solicitar revisión dentro de los treinta (30) días corridos de la notificación respectiva.

Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión plenaria por el organismo integrado a este efecto por los ministros provinciales del ramo, en la cual el quórum se formará con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los miembros presentes y será definitiva, no admitiéndose ningún otro recurso ante la comisión.

Art. 12. — La jurisdicción afectada por una decisión firme de la Comisión de Contralor e Indices deberá comunicar a dicho organismo, dentro de los noventa (90) días corridos de su notificación, las medidas que haya adoptado para su cumplimiento.

Vencido dicho término sin haberse procedido en consecuencia, y sin que la parte afectada haya intentado acción judicial, la comisión dispondrá lo necesario para que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla los importes que le correspondan sobre el producido del impuesto de coparticipación análogo al tributo local impugnado.

CAPÍTULO IV

Derecho de repetición de los contribuyentes

Art. 13. — Los contribuyentes afectados por tributos en pugna con el régimen de la presente ley podrán reclamar judicial o administrativamente de los respectivos fiscos, en la forma que determine la legislación local pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto a partir del 1º de enero de 1959, sin necesidad de ocurrir previamente ante la Comisión de Contralor e Indices.

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

Art. 14. — El Banco Central de la República Argentina y la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos deberán adoptar de inmediato las medidas del caso a los efectos de determinar, en forma discriminada por jurisdicción y por grandes sectores de la economía, el producto e ingreso nacional y los valores de la producción del conjunto de bienes y servicios de la economía nacional.

A este efecto las reparticiones citadas podrán solicitar la colaboración de los organismos provinciales similares, quienes deberán prestarla en la forma pedida.

Las reparticiones de que se trata deberán informar periódicamente a la Comisión de Contralor e Indices sobre el estado de la elaboración de los datos mencionados, especificando las posibilidades de su ejecución, así como también los inconvenientes que surjan.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 18 de diciembre de 1958.

Angel Oscar Prece. — Juan P. Bruzzo Iraola. — Hugo Enrique Castillo. — Domingo A. Condoluci. — Jorge W. Ferreira. — Luis M. Gallo. — Ricardo González. — Gilberto L. Heredia. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Augusto A. Lafuente. — Abraham Salim. — Rómulo Vinciguerra.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en general.

Sr. Prece. — El despacho que considera la Honorable Cámara ya ha sido informado.

Sr. Presidente (Decavi). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre modificación del régimen de distribución del producido de los impuestos a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales establecidos por la ley 12.956.

— Resulta afirmativa de 89 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración en particular el artículo 1º.

Sr. Juárez Peñalva. — Hago indicación de que se enuncien los artículos y que los que no se observen se den por aprobados.

Sr. Presidente (Decavi). — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 1º.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires

Sr. Marini. — El artículo 2º se refiere a la forma como se hará la distribución a las provincias de los impuestos que se recauden, y cuál es la parte que queda para la Nación.

Desde luego que este problema es propicio para reeditar un viejo debate, que alcanzó gran importancia al reunirse la Convención Constituyente en 1957, porque allí, mediante una norma constitucional, hubiera podido darse una solución de carácter definitivo y permanente.

Todos los señores diputados saben las razones por las cuales, en este aspecto, la reforma no pudo realizarse. Pero en este momento en que renovamos la ley es oportuno decir que los porcentajes de distribución no satisfacen la aspiración de esta bancada. A través de los estudios que se realizaron en la comisión especial de la Convención Constituyente se había llegado a un acuerdo para fijar la distribución que se consideraba la más equitativa, rompiendo los viejos antecedentes.

Creo que en el ánimo del Poder Ejecutivo actual habrá gravitado la idea de hacer más generosa la participación. Comprendemos la circunstancia de necesidad y el estado financiero poco cómodo que tiene la Nación para mantener un porcentaje que no satisface los viejos anhelos de las provincias y sus justos y legítimos derechos.

Indudablemente que la proporción que da este artículo 2º no es compensatoria para las provincias. Saben los señores diputados que en muchas oportunidades y también en este período ha habido que dictar algunas leyes llamadas

«de ayuda a las provincias» para poder compensar los déficit de sus presupuestos; «de ayuda a las provincias» para poder mejorar el sistema jubilatorio; «de ayuda a las provincias» para poder pagar las mejoras a los docentes. En definitiva, lo que no se da por una ley general tiene que darse a veces por leyes eventuales.

Nos hacemos cargo de la situación difícil que tiene el Estado nacional, de sus finanzas maltrechas, del déficit espantoso y alarmante, y por eso aquella vieja posición del 50 por ciento no la vamos a mantener.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor Olegario Antonio Becerra.

Sr. Marini. — Pero tampoco podemos aceptar la forma como se ha resuelto este asunto a través del despacho de comisión. Se asigna para el año 1959 el 72 por ciento para la Nación y el 28 por ciento para el conjunto de las provincias. Luego se va a aumentar anualmente el 2 por ciento para el conjunto de las provincias, en esta forma: en el año 1960, el 70 por ciento para la Nación y el 30 por ciento para el conjunto de las provincias; en el año 1961, el 68 y el 32 por ciento; en el año 1962, el 66 y el 34 por ciento, y en 1963, el 64 y el 36 por ciento, respectivamente.

Esta escala no nos satisface, y pedimos a los señores diputados, que al fin y al cabo representan al federalismo argentino, que contemplen la posibilidad de su modificación a través de esta sanción legislativa, modificando los porcentajes de esta manera: para el año 1959, el 64 por ciento para la Nación y el 36 por ciento para el conjunto de las provincias; en 1960, el 62 y el 38 por ciento; en 1961, el 58 y el 42 por ciento; en 1962, el 54 y el 46 por ciento, y solo en el año 1963, o sea el quinto año, llegar a la máxima aspiración de las provincias, que es el 50 por ciento para la Nación y el 50 por ciento para ellas.

Como dije al comienzo, no juzgo oportuno reeditar el debate, porque acaso en el fondo todos compartimos los fundamentos que pueden hacerse en favor de la tesis que propongo.

Por ese motivo quise decir estas palabras, y propongo que se acepte la modificación en la forma que he manifestado.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Ferreira. — No voy a reeditar el viejo debate sobre el problema de la coparticipación federal. Ayer, en la consideración en general, hemos fijado nuestra posición personal al respecto, y hemos valorado las circunstancias de extrema penuria por que atraviesa el erario nacional, que fundamentan el despacho de la Comisión de Presupuesto.

Los diputados del interior integrantes del bloque mayoritario auspiciamos una escala distinta a la del proyecto originario del Poder Ejecutivo, consistente en el 35 por ciento para el año 1959, 40 por ciento para el año 1960, 45 por ciento en 1961, y para 1962 la meta anhelada por todas las provincias: el 50 por ciento.

Como dije ayer, no fue posible ponernos de acuerdo porque, más que razones sentimentales, dificultades de orden financiero que afectan al erario nacional impiden consagrar la escala propuesta. A pesar de todo, el bloque mayoritario logró una mejora que se traduce en la escala incluida en el despacho.

No estamos conformes con la distribución contemplada en el despacho, pero como diputado del interior anuncio desde ya que apenas advirtamos una mejora en las finanzas nacionales, de nosotros saldrá la iniciativa para que las provincias logren la participación justa que les corresponde.

Sr. Marini. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Marini. — El señor diputado ha de tener en cuenta el argumento que en mi breve exposición hice respecto de las circunstancias que muchas veces obligan al Congreso de la Nación a votar sumas en ayuda de las provincias. Este año hemos votado dos o tres leyes con ese fin. Si las circunstancias se presentasen nuevamente, el Congreso tampoco podría rehusarse.

Lo importante es no obligar a las provincias a que por intermedio de sus agentes naturales peticionen, por no decir rueguen, al gobierno nacional esas ayudas. Es decir que se les provea de recursos permanentes que se computen en el presupuesto, lo que permitiría nivelarlo. Ya señalé las dificultades que las provincias tienen para nivelar sus presupuestos frente a las necesidades por aumentos de sueldos y de las jubilaciones.

De manera que nuestra proposición tendía a hacer un poco de justicia. Además debe tenerse presente que no se alivian las finanzas nacionales si se reducen los egresos por un lado y luego se votan partidas especiales.

Sr. Presidente (Becerra). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Ferreira. — Comprendemos que dentro de una práctica financiera sana la normalidad de los recursos traducida en la continuidad y periodicidad de su percepción es elemento esencial. Pero a través de las conversaciones que hemos tenido con los representantes del Poder Ejecutivo y de las estimaciones de la recaudación que ellos han presentado, y muy a nuestro pesar, hemos debido concretar la escala contenida en el despacho.

De todos modos conviene destacar lo que dije en la sesión de ayer: que este Poder Ejecutivo ha hecho lo que ningún otro hizo en materia

de coparticipación federal, porque ha reconocido de una sola vez para el año próximo un aumento de siete puntos, y adoptado la escala progresiva que se establece en relación a lo que actualmente perciben las provincias, 21 por ciento, en nueve puntos para el año 1960, en once puntos para 1961, en trece puntos para 1962 y en quince puntos para 1963. Estas cifras están abonadas por un aumento que importa una suma de 1.600.000.000 de pesos.

Para no replantear esta discusión, que podría llevar largas horas, me limito a fijar la posición de la Comisión de Presupuesto en el sentido de mantener el despacho con las aclaraciones que acabo de hacer en cuanto a que tan pronto mejore el estado de las finanzas argentinas mejorará más aún la coparticipación de las provincias en el producido de estos impuestos.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Juárez Peñalva. — Haré una breve aclaración.

En la sesión anterior, al informar en general el despacho sobre coparticipación federal, manifestamos que la sanción primitiva de la ley de unificación de impuestos nacionales se hizo sobre la base del 17,5 por ciento, en momentos en que el Estado nacional tenía una economía y unas finanzas muy saneadas. Cuando posteriormente se hizo un aumento en esta escala, el país estaba casi saturado de divisas. Es cuando la Nación tenía, según los cálculos estadísticos, aproximadamente 6.500.000.000 de dólares, que al cambio de entonces significaban unos 18.000.000.000 de pesos. Es decir que no era difícil hacer participar a las provincias de los beneficios que percibía un Estado que disponía de extraordinaria abundancia. Y ahora, cuando debíamos repartir entre Nación y provincia la pobreza y la miseria, el Poder Ejecutivo nacional, en paridad de condiciones con las provincias, entiende que debe subvenir a los gastos que demanda la deuda pública de la Nación que ascienden a más de 86.000.000.000 de pesos.

Las provincias han comprendido que también tienen que hacer un sacrificio, y seguirán vistiendo harapos por un tiempo más para sacar al país de este estado de angustia en que hoy está sumido.

Sr. Bernasconi. — Pero después no le vayan a echar la culpa a los porteños de ser centralizadores.

Sr. Juárez Peñalva. — No, si eso es culpa de ustedes no más; no se la vamos a echar nosotros.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. López Ballesteros. — Si bien destaco que el Poder Ejecutivo ha dado un paso adelante al aumentar la participación a las provincias de la recaudación de los impuestos que estamos tratando, apunto mi opinión personal de considerar aún insuficiente la proporción que se les

brinda a través del proyecto. Los bloques de diputados y senadores de la provincia que represento me han hecho llegar el anhelo de que peticione una participación más importante que la que presenta este proyecto, solicitud que he planteado en el bloque.

Se ha notado claramente la insuficiencia de esta participación en los mismos actos progresistas que enorgullecen a este gobierno, como por ejemplo en la equiparación de los sueldos de los maestros provinciales con los nacionales. Los gobiernos de provincia han debido recurrir a la ayuda financiera de la Nación, cuando en rigor esos fondos deberían provenir de sus propios recursos. Esto último no ha sido así por la insuficiente participación que tienen en los impuestos que recaudan.

El federalismo será una realidad en la medida que tengan vigencia estos principios económicos. La economía es un factor trascendente no solamente en el mundo de la libertad — toda vez que el hombre que sufre miserias no puede hablar de libertad — sino también en el ámbito de lo institucional. Las provincias lograrán una verdadera autonomía cuando puedan contar con medios suficientes para subvenir a sus necesidades más apremiantes, y lo lógico es que estas insuficiencias se satisfagan con sus propios impuestos y no con la petición al gobierno de la Nación para que éste, mediante préstamos o mediante una distribución de los impuestos que no es la normal, solucione sus problemas económicos.

Hemos asistido a ello en los últimos tiempos, y, en la actualidad, las provincias se ven en la necesidad imperiosa de reclamar el concurso de la ayuda federal para satisfacer las necesidades propias de sus erarios, hoy exhaustos.

Lo mismo ocurre con las municipalidades, que no cuentan con medios para satisfacer las más apremiantes necesidades, tales como el pago de remuneraciones a sus empleados, servidores que han realizado una tarea indispensable para la salud pública y el bienestar general, y que no reciben la retribución suficiente, no porque haya el propósito de no satisfacer necesidades plenamente reconocidas, sino por las consecuencias derivadas de la insuficiencia financiera que se destaca como resultado de esta distribución, no equitativa, de los impuestos nacionales.

En tal sentido, solamente me limito a destacar mi punto de vista. Si bien es cierto que acataré la decisión del bloque del sector al cual pertenezco, y que algo logró del gobierno nacional en tal sentido, entiendo que en tiempos no muy lejanos, en la medida que logremos una transformación económica evidente y entremos en una economía de abundancia, la participación deberá realizarse hasta lograr la meta anhelada, es decir, la participación igualitaria.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Señor presidente: quiero expresar el pensamiento del Poder Ejecutivo con relación a este asunto.

En el mensaje con que fue elevado este proyecto de ley al Parlamento, el Poder Ejecutivo expresó claramente que se trataba de una modificación impuesta exclusivamente por las circunstancias por que atraviesa el país. Normalmente se habla de déficit de la Nación en materia de recursos financieros; pero en realidad el déficit es tanto de la Nación como de las provincias.

Sr. Marini. — ¿Me permite una interrupción el señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Con mucho gusto.

Sr. Marini. — Puedo referir un caso que lo conozco bien, porque fui miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto de ese Estado no arrojaba déficit, sino, por el contrario, superávit.

Sr. Presidente (Becerra). — Continúa en el uso de la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Secretario de Hacienda. — Tal vez haya algunas provincias que puedan decir que tienen su presupuesto equilibrado. Pero lo cierto es que también a la provincia de Buenos Aires, en este ejercicio que ha terminado el 31 de octubre, la Nación ha tenido que prestarle ayuda para financiar parte de sus gastos. Esto ratifica lo que estaba afirmando en el sentido de que todas las provincias se encuentran en situación deficitaria, como lo está la Nación.

Con esa situación económica y financiera, el Poder Ejecutivo se ha visto en la necesidad de encarar la revisión de la ley de coparticipación. Quiero señalar que lo ha hecho con el más amplio espíritu de colaboración y comprensión de la situación económica de las provincias. Y lo señalo destacando que es la primera vez que al hacerse una modificación en este régimen se aumenta la participación en la proporción fijada en esta oportunidad. Además, se hace un crecimiento progresivo, no estático. Por otro lado, se hace por un período breve, cosa que no existía anteriormente.

Estos tres aspectos creo que muestran bien a las claras con qué espíritu el gobierno de la Nación ha contemplado este problema. No quita ello que si mañana las posibilidades del país, con el reajuste de los servicios de las distintas instituciones locales y del gobierno de la Nación, lo permiten, pueda incrementarse esta contribución.

Pero quiero señalar nada más que este último aspecto: si aparte de la contribución fijada para el año 1959, que llega al 28 por ciento, agregamos todos los otros gastos que en este

momento sostiene la Nación en las distintas jurisdicciones del país, resulta que la participación real de las provincias en los impuestos de coparticipación alcanza al 53 por ciento.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Llugdar. — Los representantes de las provincias de este bloque hemos entendido, después del cambio de opiniones que hemos tenido con los representantes del Poder Ejecutivo, que anima al Poder Ejecutivo nacional un sano federalismo, el mismo federalismo que anima a cada una de las provincias. Y en el intercambio de ideas y en la mirada retrospectiva hacia el pasado, hemos llegado también los representantes de las provincias a conclusiones interesantes que justifican la reflexión que debemos poner todos en estos momentos difíciles por los cuales pasa la Nación.

La experiencia enseña, por ejemplo, en materia de obras públicas, que se viene sucediendo una superposición de gastos que grava al erario provincial y también al erario nacional, resultando a la postre muchas obras de carácter superfluo, es decir, que no llenan el destino para el cual habían sido construídas.

Por otro lado, haciendo un análisis entre provincias afines dentro de bloques económicos, se observa también que cada una de ellas, llevada por un criterio regionalista, realizaba gastos no con el criterio de la unidad nacional, sino encerrada dentro de los límites geográficos, como si no fueran un solo pueblo dentro de una sola nación. Así, por ejemplo, se ha producido el caso de mi provincia con respecto a Tucumán y Salta, en que hemos realizado gastos respecto a riego que sumados actualmente habrían producido en su época, con un criterio racional la solución integral del problema de irrigación de cada una de esas provincias. Y llegamos a comprobar, después de tantos años de vida institucional, que muchos de esos gastos que las tres provincias han realizado han sido en realidad superfluos.

Ni Tucumán, pese a la enorme riqueza hídrica de la provincia, ni Salta, que goza de las mismas ventajas naturales, tienen realizada la solución integral del problema de irrigación, y con mayor razón no lo tiene la provincia de Santiago del Estero, que por ser provincia de aguas abajo no tiene fuentes naturales dentro de su perímetro geográfico.

El gobierno de la Nación entiende el problema del federalismo y lo entendemos nosotros también con un amplio criterio de unidad nacional, y cuando se reserva un mayor porcentaje, como en la actualidad, es porque programa con un criterio orgánico, en la prioridad de las obras públicas, aquellas que no sólo son de envergadura, sino las que resuelven problemas teniendo en cuenta en bloque la situación de

todas las provincias, para evitar la superposición de gastos a que he aludido anteriormente.

Un ejemplo concreto, relativo a un asunto enormemente debatido a través del tiempo, nos lo suministran los ríos interprovinciales. El río Dulce, que riega las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, ha sido materia de ingentes gastos, que creo alcanzan —porque no tengo en este momento cifras exactas— a más de mil millones de pesos en cada una de las provincias, y no ha sido resuelto el problema. La técnica actual demuestra que una obra pública orgánicamente realizada, obra racional por cierto, evita a las provincias los gastos superfluos que vienen haciendo, y permitiría no solamente dar a Tucumán y Santiago del Estero el agua que necesitan para riego, sino también energía hidroeléctrica a Catamarca y La Rioja mediante una obra complementaria.

Ese federalismo, que no significa la declinación de las justas aspiraciones y derechos de las provincias, es lo que ha motivado que comprendamos la preocupación del actual Poder Ejecutivo y nos preparemos para desarrollar la tarea orgánica de un planeamiento de las obras públicas que a través de los cinco años establecidos, cuando estemos con el cincuenta por ciento de participación en las recaudaciones, permitirá la solución integral de los problemas que hacen a la unidad nacional y al verdadero federalismo.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández Ramírez. — No pensaba tomar parte en la discusión de este proyecto sobre modificación del régimen de distribución del producido de los impuestos a los réditos, ventas, beneficios extraordinarios y ganancias eventuales establecido por la ley 12.956. Pero ante lo que he escuchado de parte de los señores diputados de la mayoría, y las razones emitidas por el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo, yo diría que todas las argumentaciones hechas conducen a una sola conclusión: votar el despacho que propone la minoría.

Todos los señores diputados de la mayoría han hecho manifestaciones en favor del federalismo, y todos han traído a colación las razones expuestas por los representantes del Poder Ejecutivo para justificar que no ha llegado todavía el momento de conseguir la paridad en la distribución del producido de dichos impuestos, a pesar de los deseos vehementes que todos tenemos.

Observo que se produce un curioso fenómeno sociológico en los hombres que venimos a representar a las provincias en el Parlamento nacional. Si recordamos los argumentos formulados en nuestros discursos políticos durante las cam-

pañas electorales, veremos que, evidentemente, estábamos en una lucha para dar a nuestras provincias lo que en justicia creíamos que correspondía. Pero llegamos a este recinto y se produce un fenómeno especial en la psicología de los legisladores del interior, que parecen captados por el ambiente nacional, y no obstante ser fervorosos y decididos luchadores en favor del federalismo, se ponen demasiado en contacto con el orden nacional y pierden aquella percepción de las necesidades de las provincias que siempre defendieron. Se convierten así en hombres que comprenden y aceptan, muchas veces a regañadientes, una posición que no da una satisfacción a quienes los escucharon en las tribunas públicas durante la propaganda electoral.

Nosotros podríamos en este momento dar el gran ejemplo de federalismo. Si tomamos el sentido de las argumentaciones de los señores diputados de la mayoría, tendríamos que optar, en esta oportunidad, por una solución francamente federalista, reconociendo las necesidades que tiene el orden nacional frente a los déficit provinciales, a la pobreza de las provincias, que resulta preciso conjurar. ¿Por qué las provincias están con pobres y deficitarios presupuestos? Porque no hay un reparto equitativo de acuerdo con lo que cada provincia produce en el orden de esa fuente de recursos cuya distribución hoy considera la Cámara.

Con todo el respeto que tengo hacia los señores diputados, con un concepto claro y amplio de lo que es la división de los poderes, les sugeriría un menor contacto con el Poder Ejecutivo de la Nación. Y yo daría el ejemplo histórico de los dos gobernadores que tuvo la provincia de Córdoba entre 1935 y 1943. Amadeo Sabattini no vino ni una sola vez a Buenos Aires para ponerse en contacto con el gobierno nacional. No fue necesario para que esa provincia se viera enriquecida con obras públicas que seguirán beneficiando a nuestros nietos y biznietos. Diques y obras de riego posibilitaron la obtención de energía eléctrica y riqueza de nuestros campos; se fundaron escuelas y construyeron caminos en toda la provincia; se originó así un estilo de trabajo que fue ejemplo para toda la Nación, de gobierno probo y sensato. Ese fue el ejemplo que dieron esos dos hombres que tuvieron la responsabilidad de ejercer el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, Amadeo Sabattini y Santiago H. del Castillo.

Estos hombres se redujeron sus propios sueldos. Se estableció una austeridad en el manejo de las finanzas en todos los sectores de la provincia. Esta acción se tradujo en una obra de gobierno tan extraordinaria que hasta nuestros más enconados adversarios la reconocieron como ejemplar e histórica.

No he de dejar de pedir a los señores diputados que antes de emitir su voto con respecto a este proyecto no olviden su origen, su concepto federalista y apoyen el dictamen que propicia el sector de la minoría, para que empecemos a dar algún ejemplo de independencia federalista frente a las necesidades imperiosas que, en el orden económico y social, existen en todas nuestras provincias.

Sr. López Ballesteros. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Hernández Ramírez. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Becerra). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. López Ballesteros. — Si bien es cierto, señor diputado, que no podemos negar los méritos de esos gobiernos, lo real es que durante ese proceso no se logró lo que se consigue ahora mediante la actitud del Poder Ejecutivo de la Nación, que acrecienta la participación de las provincias.

El señor presidente del bloque del radicalismo del pueblo ha reconocido con justicia que no se puede llegar al desiderátum, es decir a lo que constituye nuestro ideal, en virtud de la grave situación económica por que atravesamos. De manera que, en este estado de cosas, lo que se está exponiendo es una expresión de anhelos, que ha de recibir concreción en un futuro inmediato, cuando las condiciones económicas lo permitan. Por ahora todo está quedando en literatura, dada la desgraciada situación que se vive y un estado de cosas del cual no somos responsables, puesto que es una partida de arrastre que viene de tiempo atrás.

En tal sentido quiero destacar que no se debe a los hombres del interior esta macrocefalia que vive el país con el Gran Buenos Aires, sino a una estructura económica que se ha mantenido por tiempo muy prolongado, con olvido del interior. En un futuro no lejano la modificación de este panorama ha de constituir la gran posibilidad de desarrollo económico de la Nación, y hará que el federalismo sea una realidad de plena vigencia en la República.

Nada más y muchas gracias, señor diputado.

Sr. Presidente (Becerra). — Continúa con la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Hernández Ramírez. — Voy a terminar esta intervención, que es —repito— totalmente improvisada, puesto que no había planeado nada con respecto a un discurso metódico, ordenado y dirigido a este determinado fin.

Creo que las palabras aclaratorias del señor diputado por Córdoba, confirman las ideas expuestas por el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La situación económica del país, a la cual ha hecho referencia el señor diputado por Córdoba, no es culpa exclusiva del actual gobierno, del cual formamos parte en la rama legislativa; pero sí hay

buena parte de culpa en el gobierno —sin discriminación de ramas— por el hecho de que no hayamos podido frenar la inflación.

La labor desarrollada por la Cámara y sus comisiones en cuanto a la represión del agio y el costo excesivo de la vida, no ha podido poner límite a esa herencia fatal, a esos dos elementos que hemos querido combatir, con muy pocos resultados.

El agio y la especulación son consecuencia inmediata del proceso inflacionario, que en nuestro país ha tomado desgraciadamente un ritmo incontrolable. Por mucho que queramos reprimir aquellos males, mientras la máquina de hacer billetes siga funcionando —habría que ponerla presa en Villa Devoto— no podremos contribuir con soluciones efectivas.

Volviendo al tema de la repartición para las provincias, reitero el deseo de que mis honorables colegas de esta Cámara no olviden su origen provinciano, su concepto federalista; y no dejen que el Poder Ejecutivo siga implantando, a pesar de los siete puntos de mejora, procedimientos de repartición que están en contra de lo que todos hemos propiciado desde las tribunas partidarias.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, don Jorge Raúl Decavi.

Sr. Vinciguerra. — Lo efectivo es que este gobierno aumenta la coparticipación.

Sr. Silveira Márquez. — Es evidente, pero no es todo.

Sr. Vinciguerra. — Aspiramos a que en el futuro el aumento sea superior.

Sr. López Ballesteros. — La inflación no es hija de la maquinita solamente, sino que está ligada a diversos factores del desarrollo económico.

Sr. Hernández Ramírez. — Sería muy interesante ver qué es primero: si el huevo o la gallina. Lo cierto es que las dos consecuencias de la inflación son el agio y la especulación. Hasta los tratados de economía política más elementales lo sostienen.

Sr. Villar. — El señor diputado nos va a ayudar a buscar la gallina que nos dé los huevos de oro. (Risas.)

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 2º del despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa de 84 votos; votan 97 señores diputados

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 3º.

—Se aprueban los artículos 3º, 4º, 5º y 6º.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 7º (capítulo II, Obligaciones emergentes del régimen de esta ley).

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Vinciguerra. — Es públicamente conocida la difícil situación económica por que atraviesa el municipio de la ciudad de Buenos Aires. Todos los señores diputados saben que debido a las mejoras de los sueldos en favor de los empleados municipales, que se encontraban en situación despereja en relación al resto del personal de la administración pública, se ha originado un importante desequilibrio en su presupuesto anual.

También sabemos de la necesidad imperiosa e imprescindible de dotar al municipio de equipos de toda índole para atender las necesidades de los servicios públicos más elementales.

Frente a tal situación, yo le pediría a la comisión contemple la posibilidad de aumentar la participación que le corresponde al municipio elevando el porcentaje del cinco al seis por ciento.

Sr. Presidente (Decavi). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Prece. — En consideración a la situación deficitaria que arroja el presupuesto preventivo de la municipalidad y a las razones que acaba de exponer el señor diputado por la Capital, la comisión acepta el aumento del cinco al seis por ciento que propone a favor del municipio de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — Consecuente con la posición sostenida en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nosotros adherimos en un todo a la proposición formulada por el señor diputado por la Capital, en el sentido de que la participación en favor del municipio se eleve al siete por ciento.

Si analizamos el aporte que actualmente percibe la municipalidad, advertiremos de inmediato la necesidad imperiosa que tiene de una mayor participación en los impuestos.

Actualmente, la Nación tenía una participación del 75,1 por ciento, las provincias en conjunto una participación del 20,6 por ciento, y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 4,3 por ciento, que representan, en cifras: para la Nación, 15.733.500.000 pesos; para las provincias, 4.315.700.000, y para la municipalidad de la Capital, 900.800.000 pesos.

El presupuesto municipal puede alcanzar a 4.500 millones de pesos, según lo manifestaron los concejales que estuvieron en el seno de la comisión, y no se ve de dónde podrá sacar la municipalidad los recursos necesarios para poder cubrir ese presupuesto. El 6 por ciento que propone el señor presidente de la Comisión de Presupuesto resultará, indudablemente, insuficiente. Por eso solicitamos a los señores diputados de la mayoría que accedan a establecer

definitivamente el porcentaje del 7 por ciento sobre lo total percibido por la Nación, dentro del régimen de la ley que se está considerando.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Señor presidente: este problema del déficit de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido ya perfectamente debatido y aclarado en el seno de la comisión, donde tuvimos la satisfacción de escuchar a una delegación del Honorable Concejo Deliberante.

El déficit preventivo calculado para la municipalidad de Buenos Aires es de aproximadamente 1.000 millones de pesos. A través del mayor ingreso que ha de tener la ciudad de Buenos Aires; el aumento de las tasas del impuesto inmobiliario, del que le corresponde el 50 por ciento de la percepción, y que significará un incremento del orden de los 350 millones de pesos; la valoración de los puntos de coparticipación a través de los aumentos de la recaudación impositiva, ya sea por las medidas que se tomarán contra la evasión fiscal o por el incremento de algunos impuestos, harán que cada punto se pueda calcular en 250 millones de pesos. Por eso, los seis puntos que actualmente se propician para la ciudad de Buenos Aires significarán la suma de 1.500 millones de pesos, que unido al incremento por mayor tasa inmobiliaria, la participación que le corresponderá a la municipalidad se incrementará aproximadamente en 950 millones de pesos. De tal manera quedará compensado el déficit preventivo del presupuesto de la municipalidad de Buenos Aires, sobre todo que no dudamos que el Departamento Ejecutivo se ajustará a la política del gobierno nacional realizando el plan de economías que en este momento de angustia financiera se impone.

Tenemos entonces que con lo que la comisión acepta a través de la moción del señor diputado por la Capital, Vinciguerra, es decir, seis puntos, se establece una cantidad suficiente para dejar resuelto este problema que ha preocupado a los miembros de este sector y al señor diputado del sector de la minoría.

La Comisión de Presupuesto, interpretando la justa aspiración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de los señores diputados de ambos sectores, da su aprobación a la modificación formulada por el señor diputado Vinciguerra.

Sr. Presidente (Decavi). — Se va a votar el artículo 7º con la modificación propuesta por el señor diputado Vinciguerra, aceptada por la comisión.

— Resulta afirmativa de 87 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Decavi). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Migliaro. — Con relación a este artículo, señor presidente, tengo una preocupación que deseo me aclare el señor presidente de la comisión.

De acuerdo con los términos de la Constitución Nacional, las provincias disponen de amplios poderes para legislar con relación a este impuesto. Si aprobamos este artículo lesionaremos los derechos que la Constitución acuerda a las provincias a este respecto, porque invadimos las facultades propias de las legislaturas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Esa es la pregunta que quería formular a los señores miembros de la comisión.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — Como se trata de una ley convenio, evidentemente las provincias no están obligadas a acogerse a ella, pero en el caso que deseen hacerlo, debe cumplirse lo que indica este artículo. En primer lugar, el acogimiento debe ser establecido por ley de la Legislatura. Las demás sin normas que tienden a evitar la superposición impositiva, que debe evitarse en este problema a través de las autonomías que tienen las provincias para aplicar los impuestos directos.

Por eso estas normas, que por otra parte ya están en la ley vigente, no hacen más que asegurar que esta ley convenio pueda funcionar sin inconvenientes que signifiquen una lesión a los intereses económicos del país. Por otra parte, no interfieren en la recaudación.

Además, permiten hacer marchar este proceso en total armonía entre las provincias y la Nación, con la renuncia de atribuciones que la Constitución acuerda a cada una de las partes.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Federico F. Monjardín.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — La inquietud del señor diputado Migliaro evidentemente cuenta con una posición de tipo constitucional que hubo que obviar. Tanto es así, que esta clase de leyes han sido criticadas duramente por los hombres de nuestro partido y por todos aquellos tratadistas que han combatido esta calificación de leyes contratos, como fueron denominadas después del año 1935, cuando se implantaron por primera vez en ocasión de la ley de impuestos a los réditos, que corresponde pura y exclusivamente a las provincias y que fue impugnada de inconstitucionalidad. Luego se fue obviando el inconveniente a través de leyes de este tipo. Evidentemente se tendrá que llegar a una modificación constitucional para establecer ya definitivamente ese derecho de las provincias y fijar también definitiva-

mente la coparticipación que les debe corresponder, y que nuestro partido considera que debe ser del 50 por ciento.

En el comienzo de estas sesiones yo presenté un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo nacional se hiciera eco de esta inquietud de las provincias de auténtico federalismo, y se llegase al 50 por ciento. Pero mientras subsista esta situación de tipo constitucional, de que los impuestos directos deben ser por tiempo limitado, debe haber una coparticipación de las provincias, y se va haciendo a través de estas leyes mal calificadas de leyes contratos. Pero evidentemente obvian en principio el inconveniente, y de ahí que sean por tiempo prudencial, como en este caso se establece y se viene repitiendo desde 1935.

De modo que la disposición que se considera tiende a obviar el inconveniente y en realidad da oportunidad a las provincias para que hagan las declaraciones pertinentes y puedan adherirse o no a estos convenios. Es indudable que constituye un anhelo de esta ley, al igual que las anteriores, que las provincias no apliquen gravámenes iguales a los que contempla la ley, para evitar la superposición de impuestos.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Migliaro. — Deseo manifestar a la Honorable Cámara que he quedado satisfecho con las explicaciones dadas por los señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Si no se hace uso de la palabra, se dará por aprobado el artículo 8º.

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 9º (capítulo III, de la Comisión de Contralor e Indices).

— Se aprueban los artículos 9º, 10, 11 y 12.

— Se aprueban asimismo los artículos 13 (capítulo IV, Derecho de repetición de los contribuyentes, y 14 (capítulo V, Otras disposiciones).

Sr. Presidente (Monjardín). — El artículo 15 es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

8

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION

(Orden del día número 595)

Despacho de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aplicación del

(1) Véase el texto de la sanción en la página 6905.